

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por D. Francisco Perez, contra el C. Gefe político del partido de Pénjamo, por haber sido aprehendido y remitido en calidad de preso á la penitenciaría de Salamanca, con lo que cree que se han violado en él las garantías consignadas en el art. 16, primera parte del 19, y 20 y 24 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal dice: que Francisco Perez ha presentado escrito solicitando que la justicia federal lo ampare contra el atentado cometido en su persona por el Gefe Político de Pénjamo, cuya autoridad sin previa sentencia ni forma de juicio lo remitió preso á la Penitenciaría de Salamanca, infringiendo con este acto, en perjuicio del quejoso, todas las garantías que la Constitucion otorga para hacer efectiva la libertad del hombre.

Si para la sustanciacion del artículo sobre suspension del acto reclamado, nos hemos de atener en el caso presente á los términos estrechísimos que demarca la ley de 20 de Enero de 1869, es inconcuso que en pocos casos procederá mas lisamente la referida suspension y que el quejoso debe ser puesto en libertad inmediatamente.

En efecto, el informe rendido por el Gefe Político que motiva la queja, parece no ser mas que el complemento de la instancia del solicitante, la verdad de los hechos que este expone, y el abuso con que se ha procedido en el acto de su prision casi se desprende pulpitante de aquel informe, sin embargo de la manera con que se refieren ó suponen los hechos para legalizar violencia tan punible.

El C. Gefe Político, afectando en su informe la mas completa ignorancia de nuestras leyes, dice: que el quejoso fué juzgado por un Gefe militar, el Teniente Coronel D. Cecilio Estrada, y que segun entiende, el expresado Gefe le aplicó para sentenciarlo, la ley de suspension de garantías.

Es verdad que para la aplicacion de esta ley, es el único caso en que los gefes militares ejercen jurisdiccion, siempre que se hallan en las circunstancias y en los casos determinados por la misma ley; pero tambien es cierto que no pueden separarse en lo mas leve de las prescripciones contenidas en ella, ni en la forma del juicio, ni mucho menos en la resolucion que debe ser en los términos que previene con tan absoluta precision.

La ley citada sobre suspension de garantías, que es la de nueve de Abril del año próximo pasado, no otorga á los jueces especiales que ella ha creado, mas que la facultad de condenar á muerte á los culpables, ó de absolver á los que no lo sean; no les concede la facultad de moderar la pena ni la de imponer otra por delitos que encuentren en los autos, y no sean de los expresados en la ley mencionada; siendo esto así, y en el supuesto de que Francisco Perez no ha tenido mas Juez que el expresado Gefe; en virtud de la ley sobre suspension de garantías, no puede comprenderse su estancia en la Penitenciaría si no es conviniendo en un abuso que consistirá cuando menos, en la mas arbitraria interpretacion de la ley porque se le juzgó, si esto fué cierto.

Por lo expuesto, verá el Juzgado que el Promotor que suscribe aunque muy inclinado por las constancias de autos á creer en la verdad del atentado cometido en perjuicio del solicitante, no se cree, sin embargo, con los datos suficientes para formar el juicio recto que descarta, y pedir en su virtud con el mas pleno conocimiento de causa; por esta razon, lamenta los estrechos y perentorios términos que para la sustanciacion del artículo demarca la ley; sin embargo, du-

rante la sustanciacion del juicio en lo principal y mayormente en el término de prueba, procurará hacerse de las que sean precisas á fin de asegurar en definitiva el acierto posible.

Por tanto, el Promotor pide al Juzgado se sirva mandar suspender el actor reclamado, poniendo al quejoso en libertad, pero siempre bajo de segura fianza, á fin de no comprometer la causa pública, si resultase responsable efectivamente de algun delito, pues así procede en justicia.

Guanajuato, Enero veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Zenon J. de Velasco.*

#### *Otro Pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que tomando por base de este pedimento el que presentó con fecha 25 de Enero próximo pasado en el cual manifestó al Juzgado la presuncion que abriga de ser ciertos los hechos referidos por el reclamante, deduce por una consecuencia necesaria, que siendo atentatoria la prision impuesta al pretendido reo sin haberse observado las prevenciones y formas indispensables de las leyes, es inconcuso que se han infringido en perjuicio del solicitante las garantías constitucionales que invoca en su ocurso.

El informe con justificacion rendido á consecuencia del auto de 31 del citado Enero, no es otro ni dice mas que lo contenido en el anterior, suscrito en fecha 20: á saber: que el preso fué conducido á la cárcel por disposicion del Teniente Coronel C. Cecilio Estrada, quien pretende haberlo juzgado con arreglo á la ley de suspension de garantías y condenado á muerte, pero no se hace constar de modo alguno la verdad del hecho. No niega el Promotor la posibilidad de que sea cierto que el que-

joso haya sido juzgado, y que por consecuencia de su condena se encuentra preso; pero sí llama fuertemente su atencion, que la sentencia no se haya ejecutado en tanto tiempo, sin embargo de las prevenciones tan terminantes de ley; que no se haya dado en los informes el motivo de esta suspension; y por último, que la acta del juicio no se encuentra publicada en el periódico oficial del Estado, segun previene la ley citada de 9 de Abril en su artículo 3º parte final.

Por estas razones, cuyo fundamento no es otro que las constancias de autos existentes hasta aquí, el Promotor fiscal pide al Juzgado se sirva declarar que la justicia de la Union ampara y protege á Francisco Perez, por haberse violado en su perjuicio con la prision arbitraria que está sufriendo las garantías que la Constitucion federal otorga para hacer efectiva la libertad del hombre.

Guanajuato, Febrero trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Zenon J. de Velasco.*

#### *Otro Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal dice: que no cree necesario entrar en análisis de las pruebas rendidas por Francisco Perez en justificacion de las infracciones constitucionales que pretende se han cometido en su perjuicio, y por cuya reparacion ha iniciado el presente recurso; para rectificar su opinion en el caso presente, le basta y con exceso fijarse en el resultado que dieron las interpelaciones que á su pedimento se hicieron al Gobierno del Estado, por lo que respecta á la causa que por el delito de robo se siguió contra el referido Francisco Perez.

En el oficio que por la seccion de Justicia contestó el Gobierno á este Juzgado, y corre en el expediente á fojas 20, manifiesta con toda claridad: que el Teniente Coronel

C. Cecilio Estrada fué en efecto comisionado para perseguir las gavillas que andaban por el Bajío; que en esa época (Noviembre 1.º de 1870) aprehendió á Perez, juzgándolo y condenándolo á muerte con arreglo á la ley de nueve de Abril del mismo año, y que si el proceso está aun pendiente, es en espera de que se reúna el Congreso para resolver sobre la concesion de indulto.

La precitada comunicacion del Gobierno del Estado pone de manifiesto y deja en claro estas cosas; á saber: que supuesto el nombramiento del C. Cecilio Estrada para perseguir á las gavillas de bandidos, era incuestionable su competencia para juzgar con arreglo á la ley de suspension de garantías á los reos que aprehendiera acusados de este delito; segundo, el hecho cierto de haber sido juzgado y sentenciado el reo con arreglo á la referida ley; y por último, manifiesta la causa porque el procesado permanece en prision sin que se haya ejecutado su sentencia.

No era necesaria mayor justificacion de los hechos que quedan mencionados, para que el Promotor rectificara su parecer todo al contrario de la opinion que habia emitido en sus pedimentos anteriores; á mayor abundamiento, pidió sin embargo, que se requiriese del Gobierno, copia certificada del acta formada contra Perez, y esta copia que corre en el expediente de la foja 38 á la 51, viene justificando una vez mas la conviccion de que, el quejoso fué juzgado por autoridad legítima y sentenciado con arreglo á una ley vigente aplicable al delito por que se le juzgó; siendo consecuencia necesaria de estas verdades, que la prision de que se queja, ni es arbitraria, ni por ella han sido violadas las garantías constitucionales que invoca en su queja.

La ley reglamentaria de los recursos de amparo, previene en su artículo 9, que el Promotor pida en lo principal, con vista del ocurso del actor y del informe con justificacion que rinda la autoridad responsable. Esta disposicion de la ley es la que

motiva en muchos casos, que, como en el presente, la opinion fiscal no sea la misma antes que la que se forma despues que su conviccion toma por base el resultado de las pruebas rendidas por una y otra parte; la razon es, que ni el quejoso como interesado expondrá la verdad de los hechos en toda su pureza y sin pasion, ni lo hará tampoco la autoridad responsable, interesada muchas veces en sostener un hecho arbitrario, ó en justificar otro que pondria en evidencia su ineptitud.

Esta inconsecuencia que resulta como una necesidad inevitable de la disposicion legal que se deja indicada, es la que pone al funcionario que suscribe en el caso de formarse un juicio diametralmente opuesto al que emitió en sus anteriores pareceres. En consecuencia, y con fundamento de lo que queda expuesto, pide al Juzgado se sirva declarar que la Justicia de la Union no ampara á Francisco Perez, por no haberse violado en su perjuicio las garantías constitucionales que invoca, por razon de estar preso en la Penitenciaría de Salamanca.

Guanajuato, Marzo diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Zenon J. de Velasco.*"

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Guanajuato, diez de Abril de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio de amparo que promovió Francisco Perez, contra el C. Geffe Político del partido de Pénjamo, por haber sido aprehendido y remitido en calidad de preso á la Penitenciaría de Salamanca con violacion, segun dice, de las garantías consignadas en el artículo 16, primera parte del 19, y artículo 20 y 24 de la Constitucion Federal; y considerando: que de los autos resulta probado que el C. Teniente Coronel Cecilio Estrada juzgó y sentenció á la pena de muerte al quejoso, como sal

teador de caminos, conforme á la ley de 9 de Abril de 1870; considerando: que por efecto de la ley que se acaba de citar no disfruta Perez de las garantías expresadas en la primera parte del artículo 19 y en el artículo 20 del Código fundamental de la República, y por lo que respecta á las que otorgan los artículos 16 y 24, no aparece que se hayan conculcado en perjuicio del promovente, puesto que por una parte la causa legal de la prision que éste se halla sufriendo en la Penitenciaría de Salamanca se funda en la sentencia de muerte que fué pronunciada contra él en trece de Noviembre del año próximo pasado y que no ha sido aun ejecutada por estar pendiente la resolucion que corresponde sobre el indulto del reo; y por otra parte, la circunstancia de haber sido juzgado dos veces por el mismo delito, no está de ninguna manera acreditada; por estas consideraciones, el Juez que suscribe, declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco Perez contra el procedimiento de la Gefatura del Partido de Pénjamo que lo remitió preso á Salamanca, despues de haberlo juzgado y sentenciado á muerte el C. Teniente Coronel Cecilio Estrada. Notifiquese este fallo á las partes en la forma correspondiente, publíquese en el periódico oficial del Estado, y en seguida remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito del Estado, fallando en definitiva, lo decretó, disponiendo se reponga con el sellado respectivo el papel comun de que se ha hecho uso hasta aquí y el que se usare hasta hacerse la remision prevenida, y firmó: doy fé.—*Albino Torres*.—*Luis G. Medina*.

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Junio tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido en 14 de Enero del corriente año ante el Juez de Distrito de Guanajuato por Francisco Perez, contra los actos del Gefe político de Pénjamo, por los cuales fué aprehendido y remitido á la Penitenciaría de Salamanca, alegando que con ellos se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 16, 19, 20 y 24 de la Constitucion Federal.

Vistas las pruebas rendidas, lo pedido por el C. Promotor fiscal y la sentencia del Juez. Considerando: que segun las constancias de autos, la aprehension y prision que alega el promovente, fundando la violacion de garantías de que se queja, procede de que está juzgado y sentenciado á muerte como saltador de caminos, segun la ley de 9 de Abril del año próximo pasado, en espera de que se resuelva el recurso de indulto que ha interpuesto, y que en esta virtud los procedimientos que denuncia son la consecuencia de su estado como reo, y no hay la violacion de las garantías que ha pretendido; con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito, pronunciada en 10 de Abril último, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Perez contra el procedimiento de la Gefatura del Partido de Pénjamo, que lo remitió preso á Salamanca despues de haberlo juzgado y sentenciado á muerte el C. Teniente Coronel Cecilio Estrada.

Devuélvanse las actuaciones á dicho Juez de Distrito, con testimonio de este auto para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*José M. Lafragua*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Rami*

rez.—M. Auzá.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio nueve de mil ochocientos setenta y uno.—Agustín Peralta, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el C. Manuel Díaz Miron en representación de los Sres. Velazco hermanos, contra las providencias de la Aduana principal de Rentas de esa capital, relativas al embargo de bienes que les hizo en uso de la facultad económico-coactiva, para obligarlos al pago de la contribucion establecida por el decreto núm. 66 del Estado, que los quejosos califican opuesto al art. 124 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los Sres. Velazco hermanos de este comercio, por medio de su apoderado, han intentado el recurso de proteccion y amparo contra las providencias dictadas por la Administracion principal de Rentas de esta ciudad, relativas al cobro que les hizo de las contribuciones que establece el decreto núm. 66 de 12 de Diciembre de 1870, con violacion de garantías individuales; y corrido los trámites regulares de este juicio con la conveniente recepcion de las pruebas que conducen á justificar los hechos que en él se reservan, en cumplimiento del auto de 2 de este mes, ha examinado detenidamente las actuaciones para producir este pedimento, sujetándose en un todo á los hechos

demostrados y probados, así como á las leyes vigentes en el caso.

Los promoventes de este recurso se fundan esencialmente en que el impuesto que se les ha cobrado, empleando para el efecto la facultad coactiva que la ley concede al funcionario exactor, hasta el extremo de haberse procedido al embargo de bienes para dejar asegurados los intereses de la Hacienda pública, y dándose cuenta en seguida al Juzgado respectivo de 1ª instancia para la continuacion del procedimiento, es alcabala que se halla abolida por el art. 124 de la Constitucion federal, y al exijérseles, en virtud del decreto ya citado de la II. Legislatura, se infringen los art. constitucionales que les aseguran su propiedad particular, habiéndoselos violado esa garantía con el hecho mismo de haberseles atacado en el embargo practicado sin justo ni legítimo motivo, aduciendo además en su favor, otras razones que creen favorecerles.

El suscrito Promotor encuentra infundada la solicitud, porque segun aparece de los autos y es de pública notoriedad, el art. referido 124, no ha estado en observancia desde la fecha en que se promulgó la Constitucion hasta la presente, supuesto que tanto el Soberano Congreso nacional, como la II. Legislatura de este Estado y las de la mayor parte de los Estados de la República, han continuado sosteniendo el sistema tributario de alcabalas en sus distintos ramos y por consiguiente permanecen hasta hoy establecidas las Aduanas interiores, así del Distrito federal como de los Estados con el nombre de Administracion de Rentas; y mucho menos porque las contribuciones á que se contrae el citado decreto, unas son de alcabalas por el diez y medio por ciento que deben pagar el aguardiente y los licores de todas clases y otras de derecho de consumo por el real en arroba que deben pagar la azúcar y medio real la panela y miel prieta, siendo de esta última clase la que pueda estable-